

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N° 032 - 2013 - GR-JUNÍN/PR

Huancayo, 17 ENE. 2013

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe Legal No 015-2013-GRJ/ORAJ, de fecha 11 de enero del 2013 y Reporte N° 001-2013-ORAF, con fecha de recepción del 04 de enero de 2013, que contiene el Recurso Impugnatorio de Apelación contra la Resolución Directoral Administrativa N° 637-2012-GR-JUNÍN/ORAF, de fecha 09 de noviembre de 2012, interpuesto por el administrado **Freddy Pablo Sachahuaman Palacios**;

CONSIDERANDO:

Que, conforme fluye de los actuados, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Junín remite el Informe Técnico N° 040-2012-GRJ-CEPAD de fecha **26 de Setiembre de 2012** al Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional informándole *"que existen indicios de presuntas faltas administrativas de carácter disciplinario cometidos por el ex funcionario señalado en el presente informe [Freddy Pablo Sachahuaman Palacios] tipificados como incumplimiento de normas establecidas y negligencia en el desempeño de sus funciones, **recomendando:** instaurar proceso Administrativo disciplinario a don Freddy Pablo Sachahuaman Palacios, ex Director Regional de Transportes y Comunicaciones Junín porque habría incurrido en presunta falta de carácter administrativo disciplinario denominado como incumplimiento de normas establecidas y negligencia en el desempeño de sus funciones, el cual está tipificado en el inciso a) y d) del art. 28° del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público"*.

Que, el Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, Junín resuelve mediante Resolución Directoral Administrativa N° 540-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 01 de Octubre de 2012 lo que Ad Litteram transcribo:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO a don FREDDY PABLO SACHAHUAMAN PALACIOS, ex Director Regional de Transportes y Comunicaciones Junín, porque habría incurrido en presunta falta de carácter administrativo disciplinario denominado como incumplimiento de las Normas establecidas y Negligencia en el desempeño de las funciones, el cual está tipificado en el inciso a) y d) del artículo 28 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Legislativo N° 276.

236575



Presidencia



ARTÍCULO SEGUNDO.- RECOMENDAR, al servidor comprendido en la presente resolución ejercer su derecho a defensa en la forma y plazo señalado en el artículo 169 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector público. Asimismo se debe precisar que la ampliación de plazo a que hace referencia el artículo 169 del cuerpo legal antes mencionado, se entenderá aprobada por igual término, a la sola presentación oportuna de la solicitud por parte del procesado.

DE LA SANCION:

Que, el Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Junín mediante Resolución Directoral Administrativa N° 637-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 09 de Noviembre de 2012 ha resuelto:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO la prescripción administrativa planteada por don FREDDY PABLO SACHAHUAMAN PALACIOS, ex Director Regional de Transportes y Comunicaciones Junín, respecto al proceso administrativo disciplinario instaurado mediante R.D.A N° 540-2012-GR-JUNIN/ORAF.

ARTÍCULO SEGUNDO.- IMPONER la medida disciplinaria de AMONESTACIÓN a don FREDDY PABLO SACHAHUAMAN PALACIOS, ex Director Regional de Transportes y Comunicaciones Junín, por haber incurrido en falta de carácter administrativo disciplinario denominado como incumplimiento de las Normas establecidas en la presente ley y su reglamento y negligencia en el desempeño de las funciones, el cual está tipificado en el inciso a) y d) del artículo 28 del Decreto Legislativo N° 276, que aprueba la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Recursos Humanos inserte en el legajo personal como demerito del ex funcionario mencionado en el artículo segundo, segundo, una vez que quede consentida la presente resolución.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Que, con fecha 03 de Diciembre de 2012 Freddy Pablo Sachahuaman Palacios - en adelante el impugnante- interpone recurso de apelación contra la Resolución Directoral Administrativa N° 637-2012-GR-JUNIN/ORAF, reiterando la petición de prescripción de la instauración del proceso administrativo que no fue atendido ni interpretado correctamente por la instancia inferior, por existir una indebida interpretación de las pruebas producidas porque los antecedentes del procedimiento devienen de los Acuerdos Regionales 260-2011-GRJ/CR de fecha 21 de Junio del 2011, se acuerda aprobar el Informe Final N° 001-2011-CR/CIDIFDRTC y remitir al Presidente Regional a efectos de que implemente el proceso administrativo respectivo, elevándose el Acuerdo Regional N° 260 e Informe Final N° 001-2011 al Presidente Regional con fecha 09 de Agosto del 2011 para su conocimiento e implementación respectiva, Oficio Múltiple N° 478-2011-GR-JUNIN-CR/SE, donde se especifica que su persona y otros funcionarios de la DRTC-JUNIN porque el denunciante Villegas Lindo los denunció con nombre propio, siendo falso el argumento contenido en la apelada que no se conocía ni se había identificado a sus autores, por lo que el impugnante considera que desde el 09 de Agosto del 2011 el Titular del Pliego tuvo conocimiento de los hechos materia de instauración de proceso administrativo con el Oficio Múltiple N° 478-2011-GR-JUNIN-CR/SE. Excediéndose en 20 días el plazo legal estipulado



Presidencia



en el art. 173° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones que establece, *"el proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar"*.

Que, asimismo, el impugnante en su recurso repite los mismos argumentos sostenidos en su descargo de fecha 18 de octubre de 2012 conforme se encuentra señalado en el cuarto considerando apartado a) y b) de la Resolución Directoral Administrativa N° 637-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 09 de Noviembre de 2012, además, sostiene el impugnante en su primer otrosí digo que la sanción es injusta por haberse extinguido y agotado por imperio de la ley, por lo mismo agotará las instancias respectivas y hará valer su derecho conforme a ley, para finalmente en su segundo otrosí digo deduce la nulidad de la resolución materia de sanción con los mismos fundamentos expuestos.

Que, mediante Reporte N° 001-2013-ORAF de fecha 02 de Enero de 2013 el Director Regional de Administración y Finanzas eleva a esta instancia el recurso de apelación planteado conforme lo dispone el artículo 209° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, así mismo todo lo actuado.



Que, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado, y habiéndose procedido a la valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde efectuar el análisis del recurso ahora propuesto por el impugnante.

Que, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal conforme se encuentra establecido en el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867.

Que, el Pliego del Gobierno Regional Junín, constituye única instancia y ante el recurso de apelación planteado por el impugnante, esta instancia, procede a calificarla como recurso de reconsideración en aplicación de lo dispuesto en el artículo 213° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444: *"El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter"*.

Que, el recurso de reconsideración señalado en el Artículo 208° de la Ley señalada *supra*, establece que se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba.

Que, así tenemos que la Ley incluye una situación excepcional para el ejercicio del recurso: esto es su procedencia extraordinaria cuando se trata de cuestionar actos emitidos en única instancia como la ocurrida en el presente caso, por lo tanto, el impugnante tendría agotada la vía administrativa, por no existir instancia superior ante la cual plantear alguna apelación.



Que, antes de analizar el fondo de la controversia, deberá evaluarse la competencia para resolver el recurso planteado, por cuanto, conforme se tiene de la Resolución Ejecutiva Regional N° 427-2011-GR-JUNIN/PR de fecha 20 de Junio de 2011, aplicando el artículo 74° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 el Presidente del Gobierno Regional Junín ha delegado facultades y atribuciones entre otros, al Director Regional de Administración y Finanzas para imponer a propuesta de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, las sanciones o absoluciones a las que hubiere lugar, por lo tanto, al imponer el Director Regional de Administración y Finanzas sanción disciplinaria mediante la cuestionada Resolución Directoral Administrativa N° 637-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 09 de Noviembre de 2012 ha actuado conforme a las facultades conferidas por el Presidente del Gobierno Regional Junín, sin embargo, a tenor de lo establecido en el numeral 74.4) del artículo 74° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, quien debe resolver la impugnación contra actos administrativos emitidos en ejercicio de competencia desconcentrada, corresponderá resolver a quien haya transferido, salvo disposición legal distinta, por lo tanto, en el presente caso corresponde resolver el recurso planteado al Presidente del Gobierno Regional Junín, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 74° desconcentración significa asignar la competencia de un órgano a otro jerárquicamente dependiente de éste; manteniendo la facultad de resolver las impugnaciones de los actos administrativos dictados por el órgano desconcentrado.

Que, conforme se ha señalado *Ut Supra*, el impugnante repite los mismos argumentos sostenidos en su descargo de fecha 18 de octubre de 2012 conforme se encuentra señalado en el apartado a) y b) del cuarto considerando de la Resolución Directoral Administrativa N° 637-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 09 de Noviembre de 2012 [acto administrativo que ahora se está cuestionando], argumentos que no han logrado desvirtuar los cargos imputados al ahora impugnante, de acuerdo a lo establecido en el quinto considerando y siguientes de la cuestionada resolución, por lo tanto, esta instancia considera que revisado el expediente de vistos, tampoco el impugnante logra desvirtuar los hechos imputados en su contra, por ello, es necesario transcribir la parte considerativa de la cuestionada resolución en el extremo que se indica:

“De esta forma, constituye requisito sine qua non, para saber si ha prescrito o no la acción administrativa, determinar en qué momento la autoridad administrativa competente tomo conocimiento de la falta disciplinaria y de la identidad del presunto infractor, de donde se advierte, que si bien el Presidente Regional tomó conocimiento de hechos irregulares suscitados en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín a través del Oficio Múltiple N° 478-2011-GRJUNIN-CR/SE, de fecha 09 de agosto del




Presidencia



Trabajando con la fuerza del pueblo!

2011, que adjunta el Acuerdo Regional N° 260-2011-GRJ/CR, y este a su vez aprueba el Informe Final N° 001-2011-GRJ-CRJ-CR/CIFIDRTC, sin embargo revisado los documentos antes referidos, en ninguno de ellos se ha identificado plenamente a los responsables de estos hechos irregulares, por tanto dichos documentos no cumplen con los requisitos lineal (sic) arriba indicados para contabilizar el plazo de prescripción que plantea el administrado; (...)"



Que, por lo tanto corresponde, a esta instancia realizar un mayor desarrollo en relación a la prescripción señalada en el artículo 173° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, por cuanto, el impugnante en relación a lo señalado líneas arriba refiere lo que Ad Litteram transcribo **"Reitero petición de prescripción de la presente instauración del proceso administrativo que no fue atendido, ni interpretado correctamente por la instancia inferior, cuyo argumento de Ripley indica que no se había identificado a los supuestos responsables, cuando se da todo lo contrario, es decir existe una indebida interpretación de las pruebas producidas y falta de conocimiento de autos, por tanto la resolución apelada deviene en nula y carece de legalidad en todos sus extremos (...)"**.



DE LA PRESCRIPCIÓN:

Que, ninguna autoridad puede plantear de oficio la prescripción, del mismo modo como no puede fundar sus decisiones en su propia desidia y es que la prescripción ganada se alega por el interesado y corresponde a la administración resolverla con la mera constatación de los plazos vencidos, siendo ello así, se tiene que en el recurso planteado por el impugnante, alega que la acción disciplinaria ha prescrito, en consecuencia, corresponde pronunciarse de estimatorio o desestimatorio la prescripción planteada, por lo tanto, debemos remitirnos a los diferentes documentos que obran en el expediente administrativo, así como al Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones y a su Reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por cuanto, el impugnante ha sido sancionado por la comisión de falta de carácter administrativo disciplinario tipificado en el inciso a) y d) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276 por incumplimiento de las normas establecidas y negligencia en el desempeño de las funciones.

Que, el plazo para que opere la prescripción extintiva de la potestad sancionadora ha quedado fijado en un plazo no mayor de un año, conforme lo dispone el artículo 173° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, *"el proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada"*

autoridad. En caso contrario se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar”.

Que, conforme es de observarse del mencionado artículo, constituye requisito *sine qua non*, para saber si ha prescrito o no la acción administrativa, determinar en qué momento la **autoridad administrativa competente** tomó conocimiento de la falta disciplinaria y de la identidad del presunto infractor. A partir de este momento, el titular de la entidad (o el funcionario que tenga la autoridad delegada para tal efecto) tiene el plazo no mayor a un año para instaurar el respectivo proceso administrativo disciplinario. Al vencimiento de dicho plazo sin que se haya instaurado el proceso administrativo disciplinario prescribe (se extingue) la facultad de la administración para dar inicio al proceso respectivo.

Que, por su parte, el artículo 167° de la misma norma asigna al titular de la entidad o del funcionario que tenga la autoridad delegada para tal efecto la emisión de la resolución de instauración de proceso administrativo disciplinario; la cual debe ser notificada al interesado o publicada en el Diario oficial dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la fecha de su expedición.

LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE

EXP. N° 2368-2004-AA-LA LIBERTAD- Caso: WILSON JULIO ANTICONA LEYVA.

2. Respecto de la alegación de que el procedimiento administrativo habría prescrito o, en su caso, caducado, este Tribunal no comparte el criterio sostenido por el demandante, según el cual entre la fecha que la demandada tuvo conocimiento de las faltas disciplinarias y el inicio del procedimiento administrativo, transcurrió más de un año. En efecto, de las instrumentales obrantes en autos, se acredita que la autoridad administrativa tuvo conocimiento de las presuntas faltas disciplinarias a través del Informe N.º 06-2001-02-0309, Examen Especial a la Sociedad de Beneficiencia Pública de Trujillo, periodo Enero 2000 –Enero 2001, del 26 de julio de 2001, **a partir del cual el titular del INABIF, autoridad competente en los casos de faltas disciplinarias**, se informa de la existencia de las mismas, instaurándose el proceso administrativo disciplinario mediante Resolución Presidencial N.º 191-INABIF, de fecha 19 de julio de 2002, es decir, antes del vencimiento del plazo de un año, según consta a fojas 13 y 14.

EXP. N.º 4449-2004-AA/TC –PUNO- caso: FIDEL CUBA PÉREZ

4. “De otro lado, este Colegiado considera que no existe prescripción en cuanto a la fecha de instauración del proceso administrativo disciplinario contra el demandante, porque, si bien el artículo 173° del Decreto Supremo N.º 005-90-PCM establece que el referido proceso debe iniciarse dentro de un plazo no mayor de un año, contado desde el momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, *este debe contabilizarse desde que se haya determinado la falta cometida e identificado al presunto responsable*




Presidencia




Trabajando con la fuerza del pueblo!

de la misma, por lo que, en el caso de autos, tal plazo debe computarse desde que el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro tomó conocimiento del Informe N.º 162-2002-CG/ORAR; vale decir, antes de que venciera el plazo de prescripción de la acción. Por lo tanto, no se encuentra acreditado que con la resolución cuestionada se haya violado el derecho constitucional invocado”.

LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL PRESENTE CASO



Que, con relación a la “autoridad competente” a que se refiere el texto reglamentario aprobado por Decreto Supremo N.º 005-90-PCM si bien las normas que regulan el régimen de la carrera administrativa no establece cual o quien es la autoridad competente a la que debe comunicarse la comisión de la falta disciplinaria, en base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se puede concluir que pueden conocer dichas faltas **el titular de la entidad**, la oficina general o la que haga sus veces, **o el funcionario que tenga la autoridad delegada para tal efecto** [artículo 167º del D.S.N.º 005-90-PCM], u otro órgano de la entidad que tenga competencia para calificar determinada conducta como una falta disciplinaria sancionable; ergo, para efecto del cómputo del plazo de prescripción la comisión de la falta debe ser puesta en conocimiento no de cualquier órgano de la entidad, **sino de aquel que ejerce el control o la dirección de la misma; aspecto que supone realizar un análisis de cada caso concreto.**



Que, conforme se ha señalado *Ut Supra*, mediante Resolución Ejecutiva Regional N.º 427-2011-GR-JUNIN/PR el Presidente del Gobierno Regional Junín ha delegado facultades y atribuciones entre otros, al Director Regional de Administración y Finanzas para conocer, calificar e imponer a propuesta de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, las sanciones o absoluciones a las que hubiere lugar, por lo tanto, el Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Junín resulta ser la autoridad competente a quien debe dirigirse la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios comunicando la comisión de la falta disciplinaria y/o absoluciones a las que hubiere lugar.

Que, por ello, con fecha **26 de Setiembre de 2012** [conforme se tiene del sello fechador de la Oficina Regional de Administración y Finanzas], mediante Informe Técnico N.º 040-2012-GRJ-CEPAD – que corre a folio 316 del expediente administrativo de vistos- el Presidente de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Junín comunica a la **autoridad competente**, esto es, al Director Regional de Administración y Finanzas **-funcionario que tiene la autoridad delegada para tal efecto-**, “que existen indicios de presuntas faltas administrativas de carácter disciplinario cometidos por el ex funcionario señalado en el presente informe [Freddy Pablo Sachahuamán Palacios] tipificados como incumplimiento de normas establecidas y negligencia en el desempeño de sus funciones, **recomendando:** instaurar proceso Administrativo disciplinario.

Que, la autoridad competente, mediante Resolución Directoral Administrativa N° 540-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 01 de Octubre de 2012 resuelve instaurar proceso administrativo disciplinario a don Freddy Pablo Sachahuaman Palacios, ex Director Regional de Transportes y Comunicaciones Junín, y finalmente mediante Resolución Directoral Administrativa N° 637-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 09 de Noviembre de 2012 ha resuelto imponerle la medida disciplinaria de amonestación; por lo tanto, La autoridad competente al conocer el presente caso el **26 de Setiembre de 2012** tiene un plazo no mayor de un año para instaurar el respectivo proceso administrativo disciplinario; sin embargo, conforme es de verse de los actos administrativos señalados *supra*, se ha impuesto la medida disciplinaria el **09 de Noviembre de 2012**, esto es, dentro del año conforme faculta el artículo 173° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, ergo, no ha prescrito la acción administrativa, como alega el impugnante.

Que, en relación a lo que sostiene el impugnante en su primer otrosí digo que la sanción es injusta, por lo mismo agotará las instancias respectivas y hará valer su derecho conforme a ley, debe señalarse que es atribución de la autoridad competente calificar la gravedad de la falta imputada y determinar el tipo de sanción a imponerse conforme a los artículos 152° y 170° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM; sin embargo, dado que el impugnante insiste en que la sanción es injusta, se deja a salvo su derecho para que lo haga valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda.

Que, conforme a las disposiciones de los artículos 11°, 202°, y 207°, la nulidad de un acto administrativo puede ser declarada a pedido de parte a través de la interposición de las correspondientes recursos administrativos que correspondan (Reconsideración; apelación o revisión) o de oficio por el funcionario jerárquico superior al que emitió el acto que se invalida, cuando adolezca de alguno de los requisitos de validez; por lo tanto, en relación al segundo otrosí digo mediante el cual el impugnante deduce la nulidad de la Resolución Directoral Administrativa N° 637-2012-GR-JUNIN/ORAF materia de sanción con los mismos fundamentos expuestos; esta instancia considera que al haber planteado el recurso administrativo contra la Resolución Directoral Administrativa N° 637-2012-GR-JUNIN/ORAF ya no tiene objeto nuevamente plantear la nulidad del mismo acto y con los mismos fundamentos expuestos, cuanto más que el recurso planteado es considerado infundado conforme se establece *infra*.

Que, finalmente, en aplicación al Principio de Legalidad, mediante el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, el recurso planteado por el impugnante contra el acto administrativo contenida en la Resolución Directoral Administrativa N° 637-2012-GR-JUNIN/ORAF, este Despacho estima que debe declararse infundado en todos sus extremos por los fundamentos expuestos y habiéndose establecido en nuestro ordenamiento que todo acto administrativo es presuntamente válido, en tanto no sea declarada su nulidad por autoridad administrativa competente, conforme se encuentra establecido en el artículo 9° de la Ley del Procedimiento Administrativo

